

No. 49085*

**Spain
and
Ecuador**

Agreement on social security between the Kingdom of Spain and the Republic of Ecuador. Madrid, 4 December 2009

Entry into force: *1 January 2011 by notification, in accordance with article 35*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Spain, 11 October 2011*

**No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

**Espagne
et
Équateur**

Accord relative à la sécurité sociale entre le Royaume d'Espagne et la République de l'Équateur. Madrid, 4 décembre 2009

Entrée en vigueur : *1er janvier 2011 par notification, conformément à l'article 35*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Espagne, 11 octobre 2011*

** Numéro de volume RTNU n'a pas encore été établie pour ce dossier. Les textes reproduits ci-dessous, s'ils sont disponibles, sont les textes authentiques de l'accord/pièce jointe d'action tel que soumises pour l'enregistrement et publication au Secrétariat. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Les traductions, s'ils sont inclus, ne sont pas en form finale et sont fournies uniquement à titre d'information.*

[SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL]

**CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL
ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**

El Reino de España y la República del Ecuador, en adelante Partes Contratantes, decididos a cooperar en el ámbito de la Seguridad Social,

Considerando la importancia de asegurar a los trabajadores de cada uno de los dos Estados que ejerzan o hayan ejercido una actividad profesional en el otro, una mejor garantía de sus derechos,

Reconociendo los lazos de amistad que unen a los dos Estados,

Han decidido concluir este Convenio acordando lo siguiente:

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Definiciones

1. Las expresiones y términos que se enumeran a continuación tienen, a efectos de aplicación del presente Convenio, el siguiente significado:
 - a) "Legislación": las leyes, reglamentos y demás disposiciones de Seguridad Social a que se refiere el artículo 2, vigentes en el territorio de cada una de las Partes Contratantes.
 - b) "Autoridad Competente":
 - en lo que se refiere a España, el Ministerio de Trabajo e Inmigración;
 - en lo que se refiere a la República del Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
 - c) "Institución Competente": Institución responsable, de acuerdo con la legislación de cada una de las Partes Contratantes del reconocimiento del derecho y del abono de las prestaciones.
 - d) "Organismo de enlace": Organismo de coordinación e información entre las Instituciones de ambas Partes Contratantes que intervenga en la aplicación del Convenio, y en la información a los interesados sobre derechos y obligaciones derivados del mismo.
 - e) "Trabajador": toda persona que como consecuencia de realizar o haber realizado una actividad por cuenta ajena o propia, está, o ha estado sujeta, a las legislaciones enumeradas en el artículo 2.
 - f) "Pensionista": toda persona que, en virtud de la legislación de una o de ambas Partes Contratantes, reciba pensión.
 - g) "Miembros de la familia y derechohabientes": las personas reconocidas como tales por la legislación aplicable de cada una de las Partes Contratantes.

- h) "Residencia": la estancia habitual legalmente establecida.
 - i) "Estancia": la permanencia temporal en el territorio de una Parte de quien tiene su residencia en la otra Parte.
 - j) "Periodo de Seguro": los períodos de cotización obligatorios o voluntarios tales como se definen o admiten como períodos de seguro por la legislación bajo la cual han sido cubiertos o se consideran como cubiertos, así como todos los períodos asimilados en la medida en que sean reconocidos por esta legislación como equivalentes a los períodos de seguro.
 - k) "Prestación económica" y "Pensión": todas las prestaciones en metálico y pensiones previstas en la legislación que, de acuerdo con el artículo 2, quedan incluidas en este Convenio, así como las mejoras por revalorización, complementos o suplementos de las mismas.
2. Los demás términos o expresiones utilizados en el Convenio tienen el significado que les atribuye la legislación que se aplica.

Artículo 2

Campo de aplicación objetivo

1. El presente Convenio se aplicará:
- A) Por parte del Ecuador:
 - A la legislación relativa a las prestaciones contributivas del Seguro General Obligatorio a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en lo que se refiere a:
 - a) Subsidio de Maternidad
 - b) Subsidio de enfermedad.
 - c) Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte que incluye pensiones de supervivencia a viudas y huérfanos.
 - d) Seguros de Riesgos del Trabajo ante contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

e) Auxilio de Funerales.

B) Por parte de España:

A la legislación relativa a las prestaciones contributivas del Sistema español de Seguridad Social, con excepción de los regímenes especiales de funcionarios públicos, civiles y militares, en lo que se refiere a:

- a) Incapacidad temporal en los casos de enfermedad común y accidente no laboral.
 - b) Maternidad, Riesgo durante el embarazo.
 - c) Incapacidad Permanente, Jubilación y Supervivencia.
 - d) Prestaciones económicas derivadas de Accidente de trabajo, y enfermedad profesional.
 - e) Auxilio por defunción.
2. El presente Convenio se aplicará igualmente a la legislación que en el futuro complete o modifique la enumerada en el apartado precedente.
 3. El Convenio se aplicará a la legislación que en una Parte Contratante extienda la normativa vigente a nuevos grupos de personas, siempre que la Autoridad Competente de la otra Parte no se oponga a ello dentro de los tres meses siguientes a la recepción de la notificación de dichas disposiciones.
 4. El presente Convenio se aplicará a la legislación que establezca un nuevo Régimen Especial de Seguridad Social o una nueva rama cuando las Partes Contratantes así lo acuerden.
 5. No se incluirán los periodos que, en cumplimiento de otros Convenios de seguridad social equiparables a este Convenio, se tendrían en cuenta con el fin de adquirir el derecho a prestaciones en virtud de la legislación de una Parte.

Artículo 3

Campo de aplicación subjetivo

El presente Convenio será de aplicación a los trabajadores y pensionistas que estén o hayan estado sujetos a las legislaciones enumeradas en el artículo 2, en una o ambas Partes Contratantes, así como a los miembros de sus familias y derechohabientes en cada caso.

Artículo 4

Igualdad de trato

Los nacionales de una Parte Contratante y los miembros de su familia o derechohabientes estarán sometidos y se beneficiarán de la Seguridad Social en el territorio de la otra Parte en las mismas condiciones que los nacionales de la misma, sin perjuicio de las disposiciones particulares contenidas en este Convenio.

Artículo 5

Totalización de periodos

1. Cuando la legislación de una Parte Contratante subordine la adquisición, conservación o recuperación del derecho a las prestaciones económicas de carácter contributivo al cumplimiento de determinados periodos de seguro, la Institución Competente tendrá en cuenta a tal efecto, cuando sea necesario, los periodos de seguro cumplidos con arreglo a la legislación de la otra Parte Contratante, como si se tratara de periodos cumplidos con arreglo a la legislación de la primera Parte, siempre que no se superpongan.
2. Cuando deba llevarse a cabo la totalización de periodos de seguro cumplidos en ambas Partes Contratantes para el reconocimiento del derecho a las prestaciones, se aplicarán las siguientes reglas:
 - a) Cuando coincida un periodo de seguro obligatorio con un periodo de seguro voluntario o equivalente se tendrá en cuenta el periodo de seguro obligatorio.

- b) Cuando coincidan dos periodos de seguro voluntario acreditados en ambas Partes Contratantes, cada Parte tendrá en cuenta los periodos de seguro voluntarios cumplidos en su territorio.
 - c) Cuando en una Parte Contratante no sea posible precisar la época en que determinados periodos de seguro hayan sido cumplidos, se presumirá que dichos periodos no se superponen con los periodos de seguro cumplidos en la otra Parte.
3. Si se exigen periodos de seguro para la admisión al seguro voluntario o continuación facultativa del seguro, los periodos de seguro cubiertos por el trabajador en virtud de la legislación de una Parte Contratante, se totalizarán si fuera necesario, con los periodos de seguro cubiertos en virtud de la legislación de la otra Parte siempre que no se superpongan.

Artículo 6

Pago de prestaciones económicas en el extranjero

- 1. Salvo que el presente Convenio disponga otra cosa, las prestaciones económicas no estarán sujetas a reducción, modificación, suspensión, supresión o retención por el hecho de que el beneficiario se encuentre o resida en el territorio de la otra Parte Contratante y se le harán efectivas por la Parte Contratante que las haya reconocido, en la entidad financiera designada por el beneficiario.
- 2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará a las prestaciones económicas de incapacidad temporal.
- 3. Las pensiones reconocidas en base a este Convenio a los interesados que residan en un tercer país se harán efectivas, teniendo en cuenta los apartados anteriores, en las mismas condiciones y con igual extensión que a los propios nacionales que residan en ese tercer país.

TÍTULO II

DISPOSICIONES SOBRE LA LEGISLACIÓN APLICABLE

Artículo 7

Norma general

Los trabajadores a quienes sea aplicable el presente Convenio, estarán sujetos exclusivamente a la legislación de Seguridad Social de la Parte Contratante en cuyo territorio ejerzan la actividad laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.

Artículo 8

Normas particulares y excepciones

1. Respecto a lo dispuesto en el artículo 7, se establecen las siguientes normas particulares y excepciones:
 - a) El trabajador asalariado al servicio de una Empresa cuya sede se encuentre en el territorio de una de las Partes Contratantes y sea enviado por dicha Empresa al territorio de la otra Parte para realizar trabajos de carácter temporal quedará sometido en su totalidad a la legislación de la primera Parte, siempre que la duración previsible del trabajo para el que ha sido desplazado no exceda de tres años, ni haya sido enviado en sustitución de otro trabajador cuyo período de desplazamiento haya concluido.
 - b) Si, por circunstancias imprevisibles, la duración del trabajo a que se refiere el apartado anterior excediera de los tres años, el trabajador continuará sometido a la legislación de la primera Parte Contratante por un nuevo período, no superior a dos años, a condición de que la Autoridad Competente de la segunda Parte u organismo en quien delegue dé su conformidad.
 - c) El trabajador por cuenta propia que ejerza normalmente su actividad en el territorio de una Parte contratante en la que está asegurado y que pase a realizar un trabajo de la misma naturaleza en el territorio de la otra Parte, continuará sometido en su totalidad a la legislación de la primera Parte, a condición de que la duración previsible del trabajo no exceda de tres años.

- d) Si, por circunstancias imprevisibles, la duración del trabajo a que se refiere el apartado anterior excediera de los tres años, el trabajador continuará sometido a la legislación de la primera Parte Contratante por un nuevo período, no superior a dos años, a condición de que la Autoridad Competente de la segunda Parte u organismo en quien delegue dé su conformidad.
- e) El personal itinerante al servicio de empresas de transporte aéreo que desempeñe su actividad en el territorio de ambas Partes Contratantes, estará sujeto a la legislación de la Parte en cuyo territorio tenga su sede la empresa
- f) El trabajador asalariado que ejerza su actividad a bordo de un buque estará sometido a la legislación de la Parte Contratante cuya bandera enarbole el buque.
No obstante lo anterior, cuando el trabajador sea remunerado por esa actividad por una empresa o una persona que tenga su domicilio en el territorio de la otra Parte Contratante, deberá quedar sometido a la legislación de esta Parte Contratante, si reside en su territorio. La empresa o persona que pague la retribución será considerada como empresario para la aplicación de dicha legislación.
- g) Los trabajadores nacionales de una Parte Contratante y con residencia en la misma que presten servicios en una empresa pesquera mixta constituida en la otra Parte Contratante y en un buque abanderado en esa Parte Contratante, se considerarán trabajadores de la empresa participante del país del que son nacionales y en el que residen y, por tanto, quedarán sujetos a la legislación de esta Parte Contratante, debiendo la citada empresa asumir sus obligaciones como empresario.
- h) Los trabajadores empleados en trabajos de carga, descarga, reparación de buques, y servicios de vigilancia en el puerto, estarán sometidos a la legislación de la Parte Contratante a cuyo territorio pertenezca el puerto.

- i) Los miembros de las Misiones Diplomáticas y de las Oficinas Consulares y el personal al servicio privado de los mismos, se regirán por lo establecido en el Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 18 de abril de 1961 y en el Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares, de 24 de abril de 1963, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación:

El personal administrativo y técnico y los miembros del personal de servicio de las Misiones Diplomáticas y de las Oficinas Consulares de cada una de las Partes, así como el personal al servicio privado de los miembros de aquéllas, podrán optar entre la aplicación de la legislación de cualquiera de las Partes Contratantes siempre que sean nacionales del Estado de envío o hayan estado sujetos a su legislación.

La opción se ejercerá dentro de los tres primeros meses a partir de la entrada en vigor del presente Convenio o, según el caso, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de iniciación del trabajo en el territorio del Estado receptor.

- j) Los funcionarios públicos de una Parte Contratante distintos a los que se refiere la letra i), que se hallen destinados en el territorio de la otra Parte, quedarán sometidos a la legislación de la Parte a la que pertenece la Administración de la que dependen.
 - k) Las personas enviadas por una de las Partes Contratantes en misiones de cooperación, al territorio de la otra Parte, quedarán sometidas a la Seguridad Social de la Parte que las envía, salvo que en los acuerdos de cooperación se disponga otra cosa.
2. Las Autoridades Competentes de ambas Partes Contratantes o los Organismos e Instituciones designados por ellas podrán, de común acuerdo, establecer otras excepciones o modificar las previstas en los apartados anteriores.

TÍTULO III

DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS PRESTACIONES

CAPÍTULO I

Prestaciones económicas por incapacidad temporal, maternidad, y riesgo durante el embarazo

Artículo 9

Reconocimiento del derecho

Las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, y las prestaciones económicas por maternidad, y riesgo durante el embarazo serán concedidas por la Institución Competente de la Parte Contratante cuya legislación sea aplicable al trabajador conforme a los artículos 7 y 8 del presente Convenio y de acuerdo con la misma.

CAPÍTULO 2

Prestaciones económicas por incapacidad permanente, jubilación y supervivencia

Sección 1ª

Disposiciones comunes

Artículo 10

Determinación del derecho y cálculo de las prestaciones económicas

El trabajador que haya estado sometido a la legislación de una y otra Parte Contratante, causará derecho a las prestaciones económicas reguladas en este Capítulo en las condiciones siguientes:

1. La Institución Competente de cada Parte Contratante determinará el derecho y calculará la prestación económica, teniendo en cuenta únicamente los periodos de seguro acreditados en esa Parte Contratante.

2. Asimismo, la Institución Competente de cada Parte Contratante determinará los derechos a las prestaciones económicas totalizando los periodos de seguro cumplidos bajo la legislación de ambas Partes Contratantes. Cuando efectuada la totalización se alcance el derecho a la prestación, para el cálculo de la cuantía a pagar, se aplicarán las reglas siguientes:
 - a) Se determinará la cuantía de la prestación económica a la cual el interesado hubiera tenido derecho, como si todos los periodos de seguro totalizados hubieran sido cumplidos bajo su propia legislación (pensión teórica).
 - b) El importe de la prestación económica se establecerá aplicando a la pensión teórica la misma proporción existente entre el periodo de seguro cumplido en esa Parte Contratante y la totalidad de los periodos de seguro cumplidos en ambas Partes Contratantes (pensión prorata temporis).
 - c) Si la legislación de alguna de las Partes Contratantes exige una duración máxima de periodos de seguro para el reconocimiento de una pensión completa, la Institución Competente de esa Parte tomará en cuenta, para el cálculo de la pensión, solamente los periodos de seguro de la otra Parte que sean necesarios para alcanzar dicha pensión completa. Lo dispuesto anteriormente no será válido para las prestaciones económicas cuya cuantía no está en función de los periodos de seguro.
3. Determinados los derechos conforme se establece en los párrafos 1 y 2 precedentes, la Institución Competente de cada Parte Contratante reconocerá y abonará la prestación económica que sea más favorable al interesado, independientemente de la resolución adoptada por la Institución Competente de la otra Parte Contratante.

Artículo 11

Cuantías debidas en virtud de periodos de seguro voluntario

Para calcular tanto la pensión teórica como el importe efectivo de la prestación económica con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10, se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 5.

La cuantía efectivamente debida, calculada con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10, se aumentará en la cuantía que corresponda a los periodos de seguro voluntario que no hayan sido computados con arreglo a lo dispuesto en la letra a), apartado 2 del artículo 5. Este aumento se calculará según lo dispuesto por la legislación de la Parte Contratante, con arreglo a la cual se hayan cumplido los periodos de seguro voluntario.

Artículo 12

Periodos de seguro inferiores a un año

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, cuando la duración total de los periodos de seguro cumplidos bajo la legislación de una Parte Contratante no llega a un año y, con arreglo a la legislación de esa Parte no se adquiera derecho a prestaciones económicas, la Institución de dicha Parte, no reconocerá prestación económica alguna por el referido periodo. Los periodos citados se tendrán en cuenta, si fuera necesario, por la Institución de la otra Parte Contratante para el reconocimiento del derecho y determinación de la cuantía de la pensión según su propia legislación, pero ésta no aplicará lo establecido en el apartado 2 b) del artículo 10.
2. A pesar de lo establecido en el párrafo anterior, los periodos inferiores a un año acreditados bajo la legislación de ambas Partes Contratantes podrán ser totalizados por aquella Parte en la que el interesado reúne los requisitos para acceder a la prestación económica. De tener derecho a la misma en ambas Partes, ésta solo se reconocería por aquella en la que el trabajador acredite las últimas cotizaciones. En estos supuestos no sería de aplicación para la liquidación de la pensión lo dispuesto en el apartado 2, b) del artículo 10.

Artículo 13

Condiciones específicas para el reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas

1. Si la legislación de una Parte Contratante subordina la concesión de las prestaciones económicas reguladas en este Capítulo a la condición de que el trabajador haya estado sujeto a su legislación en el momento de producirse el hecho causante de la prestación,

esta condición se considerará cumplida si en dicho momento el trabajador está asegurado en virtud de la legislación de la otra Parte Contratante o, en su defecto, cuando reciba una prestación económica de esa Parte, basada en sus propios periodos de seguro.

Para el reconocimiento de las pensiones de supervivencia, si es necesario se tendrá en consideración si el sujeto causante estaba en alta o era pensionista de acuerdo con la legislación de la otra Parte.

2. Si la legislación de una Parte Contratante exige para reconocer la prestación económica que se hayan cumplido periodos de cotización en un tiempo determinado inmediatamente anterior al hecho causante de la prestación, esta condición se considerará cumplida si éstos se acreditan en el período inmediatamente anterior al reconocimiento de las prestaciones económicas en la otra Parte.
3. Las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión previstas por la legislación de una de las Partes Contratantes en el caso de pensionistas que ejerzan una actividad laboral, les serán aplicables aunque ejerzan ésta en el territorio de la otra Parte Contratante.

Artículo 14

Cómputo de periodos de cotización en Regímenes Especiales o en determinadas profesiones

Si la legislación de una de las Partes Contratantes condiciona el derecho a prestaciones económicas o la concesión de determinados beneficios al cumplimiento de periodos de seguro en una profesión sometida a un Régimen Especial o, en una profesión o empleo determinado, los periodos cumplidos bajo la legislación de la otra Parte sólo se tendrán en cuenta, para la concesión de tales prestaciones o beneficios, si hubieran sido acreditados al amparo de un régimen de igual naturaleza, ó a falta de éste, en la misma profesión o, dado el caso, en un empleo similar.

Si, teniendo en cuenta los periodos así cumplidos, el interesado no satisface las condiciones requeridas para beneficiarse de una prestación económica de un Régimen Especial, estos períodos serán tenidos en cuenta para la concesión de prestaciones económicas del Régimen General o de otro Régimen Especial en el que el interesado pudiera acreditar derecho.

Artículo 15

Determinación del grado de incapacidad

1. Para la determinación de la disminución de la capacidad de trabajo a efectos de la concesión de las correspondientes prestaciones económicas de incapacidad, la Institución Competente de cada una de las Partes Contratantes efectuará su evaluación de acuerdo con la legislación que aplique.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior las Instituciones Competentes de cada una de las Partes Contratantes tendrán en cuenta los informes médicos y los datos administrativos emitidos por las Instituciones de la otra Parte. No obstante, cada Institución podrá someter al asegurado a reconocimiento por médicos elegidos por dicha Institución y a cargo de la misma.

Sección 2ª

Aplicación de la legislación española

Artículo 16

Base reguladora de las prestaciones económicas

1. Para establecer la base reguladora de las prestaciones económicas, la Institución Competente tomará en cuenta únicamente los periodos de seguro cumplidos de conformidad con su legislación.
2. Para determinar la base reguladora de las prestaciones económicas, cuando sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, se aplicarán las siguientes normas:

- a) El cálculo de la pensión teórica española se efectuará sobre las bases de cotización reales del asegurado en España durante los años inmediatamente anteriores al pago de la última cotización a la Seguridad Social española.
- b) La cuantía de la pensión se incrementará con arreglo al importe de los aumentos y revalorizaciones calculados para cada año posterior para las pensiones de la misma naturaleza.

Sección 3ª

Aplicación de la legislación ecuatoriana

Artículo 17

Las prestaciones de invalidez, vejez y muerte se otorgarán con base a las disposiciones de la ley de Seguridad Social, su Reglamento General y de las Resoluciones dictadas por el Consejo Directivo sobre esta materia, con sujeción a las aportaciones efectivamente recibidas.

La pensión mínima será proporcional al tiempo aportado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Las pensiones a prorrata temporis no superarán en ningún caso la máxima que se encontrare vigente.

CAPÍTULO 3

Prestaciones económicas por Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional

Artículo 18

Determinación del derecho a prestaciones económicas

El derecho a las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional será determinado de acuerdo con la legislación de la Parte Contratante a la que el trabajador se hallase sujeto en la fecha de producirse el accidente o de contraerse la enfermedad.

Artículo 19

Agravación de las secuelas de un accidente de trabajo

Si el trabajador, víctima de un accidente de trabajo, sufre una agravación de las secuelas del accidente, estando sujeto a la legislación de la otra Parte, las prestaciones económicas que puedan corresponderle por esta agravación serán a cargo de la Institución Competente de la Parte Contratante en la que el trabajador se hallaba asegurado en el momento de producirse el accidente de trabajo.

Artículo 20

Enfermedad profesional

1. Las prestaciones económicas por enfermedad profesional se regularán de acuerdo con la legislación de la Parte Contratante que fuera aplicable al trabajador durante el tiempo que estuvo ejerciendo la actividad sujeta a riesgo de enfermedad profesional, aun cuando ésta se haya diagnosticado por primera vez estando sujeto el trabajador a la legislación de la otra Parte.
2. Cuando el trabajador haya realizado sucesiva o alternativamente dicha actividad, estando sujeto a la legislación de una y otra Parte Contratante, sus derechos serán determinados de acuerdo con la legislación de la Parte a la que esté o haya estado sujeto en último lugar por razón de dicha actividad. Si no alcanzara derecho a prestaciones económicas en esa Parte, sería de aplicación lo dispuesto en la legislación de la primera.

Artículo 21

Agravación de la enfermedad profesional

1. En caso de que una enfermedad profesional haya originado la concesión de prestaciones económicas por una de las Partes Contratantes, ésta responderá de cualquier agravación de la enfermedad que pueda tener lugar aun cuando se halle sujeto a la legislación de la otra Parte en caso de que la actividad ejercida en la otra Parte no sea del mismo riesgo. Si, por el contrario, la actividad ejercida en la otra Parte tiene el mismo riesgo que la que generó la enfermedad profesional anterior, quedará sometido a la legislación de esta última Parte.

2. Si, después de haber sido reconocida una pensión de incapacidad permanente por enfermedad profesional por la Institución de una Parte Contratante, el interesado ejerce una actividad susceptible de agravar la enfermedad profesional que padece, estando sujeto a la legislación de la otra Parte, la Institución Competente de la primera Parte continuará abonando la pensión que tenía reconocida sin tener en cuenta la agravación y con arreglo a lo dispuesto en su legislación. La Institución Competente de la segunda Parte, a cuya legislación ha estado sujeto el interesado mientras se producía la agravación, le concederá una prestación económica cuya cuantía será igual a la diferencia que exista entre la cuantía de la prestación económica a que el interesado tenga derecho después de la agravación y la cuantía de la prestación económica a la que hubiera tenido derecho en esa Parte, antes de la agravación.

Artículo 22

Consideración de secuelas por anteriores accidentes de trabajo o enfermedades profesionales

Para valorar la disminución de la capacidad derivada de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, se tendrán en cuenta las secuelas de anteriores accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que pudiera haber sufrido el trabajador, aunque éstos se hubieran producido estando sujeto a la legislación de la otra Parte Contratante.

CAPÍTULO 4

Auxilio por defunción o de funerales

Artículo 23

Auxilio por defunción o de funerales

La asignación por Auxilio por defunción o de funerales se regirá por la legislación que fuera aplicable al trabajador en la fecha del fallecimiento.

1. En los casos de pensionistas que tuvieran derecho a prestaciones económicas por aplicación de las legislaciones de ambas Partes Contratantes, el reconocimiento de aquella se regulará por la legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio residía el asegurado.
2. Si la residencia del pensionista fuera en un tercer país, la legislación aplicable, en el caso de que tuviera derecho a prestaciones económicas en ambas Partes Contratantes, sería la de la Parte Contratante donde figuró asegurado por última vez.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES DIVERSAS, TRANSITORIAS Y FINALES

CAPÍTULO 1

Disposiciones diversas

Artículo 24

Atribuciones y obligaciones de las Autoridades Competentes

1. Se faculta a las Autoridades Competentes de ambas Partes Contratantes para establecer el Acuerdo Administrativo necesario para la aplicación del presente Convenio.
2. Las Autoridades Competentes de ambas Partes deberán:
 - a) Designar los respectivos Organismos de Enlace.
 - b) Comunicar las medidas adoptadas en el plano interno para la aplicación de este Convenio.
 - c) Notificar todas las disposiciones legislativas y reglamentarias que modifiquen las que se mencionan en el artículo 2.
 - d) Prestar la más amplia colaboración técnica y administrativa posible para la aplicación de este Convenio.
 - e) Interpretar de común acuerdo las disposiciones del Convenio que puedan plantear dudas a sus Instituciones competentes.

3. Podrá reunirse una Comisión mixta presidida por las Autoridades Competentes de ambas Partes Contratantes, a petición de cualquiera de ellas, con la finalidad de examinar los problemas que puedan surgir en la aplicación de este Convenio y del Acuerdo Administrativo.

Artículo 25

Presentación de documentos

1. Las solicitudes, declaraciones, recursos y otros documentos que, a efectos de aplicación de la legislación de una Parte Contratante, deban ser presentados en un plazo determinado ante las Autoridades o Instituciones correspondientes de esa Parte, se considerarán como presentados ante ellas si lo hubieran sido dentro del mismo plazo ante las Autoridades o Instituciones correspondientes de la otra Parte.
2. Cualquier solicitud de prestación económica presentada según la legislación de una Parte Contratante será considerada como solicitud de la prestación correspondiente según la legislación de la otra Parte, siempre que el interesado manifieste expresamente o se deduzca de la documentación presentada, que ha ejercido una actividad laboral o ha estado asegurado en el territorio de dicha Parte.
3. El interesado podrá solicitar expresamente que se le aplase la liquidación de la prestación con arreglo a la legislación de una de las partes.

Artículo 26

Ayuda administrativa entre Instituciones

1. Las Instituciones Competentes de ambas Partes Contratantes podrán solicitarse, en cualquier momento, reconocimientos médicos, comprobaciones de hechos y actos de los que pueden derivarse la adquisición, modificación, suspensión, supresión, extinción o mantenimiento del derecho a prestaciones por ellas reconocido. Los gastos que en consecuencia se produzcan serán reintegrados, sin demora, por la Institución Competente que solicitó el reconocimiento o la comprobación, cuando se reciban los documentos justificativos de tales gastos.

2. La Institución Competente de una de las Partes Contratantes que, al liquidar o revisar una prestación económica de acuerdo con lo dispuesto en el Título III de este Convenio, compruebe que ha pagado al beneficiario de prestaciones económicas una cantidad superior a la debida, podrá solicitar de la Institución Competente de la otra Parte que deba prestaciones económicas de igual naturaleza al mismo beneficiario, la retención sobre el primer pago de los atrasos correspondientes a los abonos periódicos de la cantidad pagada en exceso, dentro de los límites establecidos por la legislación interna de la Parte que realice la retención. Esta última Institución transferirá la suma retenida a la Institución acreedora.

Artículo 27

Exenciones en actos y documentos administrativos

1. Las exenciones de derechos de registro, de escritura, de timbre y de tasas consulares u otros análogos, previstas en la legislación de cada una de las Partes Contratantes, se extenderá a los certificados y documentos que se expidan por las Administraciones o Instituciones Competentes de la otra Parte en aplicación del presente Convenio.
2. Todos los actos administrativos, documentos, que se expidan para la aplicación del presente Convenio serán dispensados de los requisitos de legalización.

Artículo 28

Actualización o revalorización de las prestaciones económicas

Las prestaciones económicas reconocidas por aplicación de las normas del Título III de este Convenio se actualizarán o revalorizarán de acuerdo con la legislación interna de cada una de las Partes Contratantes y teniendo en cuenta las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 29

Modalidades y garantía del pago de las prestaciones económicas

1. Las Instituciones Competentes de cada una de las Partes Contratantes quedarán liberadas de los pagos que se realicen en aplicación del presente Convenio, cuando éstos se efectúen en la moneda de curso legal de su país.
2. Si se promulgasen en alguna de las Partes Contratantes disposiciones que restrinjan la transferencia de divisas, ambas Partes adoptarán de inmediato las medidas necesarias para garantizar la efectividad de los derechos derivados del presente Convenio.

Artículo 30

Regulación de las controversias

1. Las Autoridades Competentes deberán resolver mediante negociaciones las eventuales controversias y las diferencias de interpretación del presente Convenio y de su Acuerdo Administrativo.
2. Si las controversias no pudieran ser resueltas mediante negociación en un plazo de seis meses a partir del comienzo de la misma, éstas deberán ser sometidas a una comisión arbitral, cuya composición y procedimiento serán fijados de común acuerdo entre las Partes contratantes. La decisión de la comisión arbitral será obligatoria y definitiva.

CAPÍTULO 2

Disposiciones transitorias

Artículo 31

Cómputo de períodos anteriores a la vigencia del Convenio

Los períodos de seguro cumplidos de acuerdo con la legislación de cada una de las Partes Contratantes, antes de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, serán tomados en consideración para la determinación del derecho y la cuantía de las prestaciones que se reconozcan en virtud del mismo.

Artículo 32

Hechos causantes anteriores a la vigencia del Convenio

1. La aplicación de este Convenio otorgará derecho a prestaciones económicas por contingencias acaecidas con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor. Sin embargo, el abono de las mismas no se efectuará en ningún caso por periodos anteriores a su vigencia.
2. Las pensiones que hayan sido liquidadas por una o ambas Partes Contratantes o los derechos a pensiones que hayan sido denegados antes de la entrada en vigor de este Convenio podrán ser revisados al amparo del mismo y de acuerdo con el procedimiento legal establecido en cada Parte, a petición de los interesados. El derecho se adquirirá desde la fecha de la solicitud, salvo disposición más favorable de la legislación de esa Parte.

No se revisarán las prestaciones económicas abonadas que hayan consistido en una cantidad única.

CAPÍTULO 3

Disposiciones finales

Artículo 33

Vigencia del Convenio

1. El presente Convenio se establece por tiempo indefinido, pudiendo ser denunciado total o parcialmente por cualquiera de las Partes Contratantes mediante notificación a la otra. En este caso cesará su vigencia después de seis meses desde la entrega de dicha notificación.
2. En caso de denuncia, las disposiciones del presente Convenio seguirán siendo aplicables a los derechos adquiridos al amparo del mismo. Asimismo, las Partes Contratantes acordarán las medidas que garanticen los derechos en curso de adquisición derivados de los periodos de seguro cumplidos con anterioridad a la fecha del cese de vigencia del Convenio.

Artículo 34

Finalización de los Convenios anteriores

1. El Convenio General sobre Seguridad Social entre Ecuador y España de 1 de abril de 1960 y el Convenio de 8 de mayo de 1974 Adicional al Convenio de Seguridad Social hispano-ecuatoriano dejarán de tener efecto a partir de la entrada en vigor de este Convenio.
2. El presente Convenio garantiza los derechos adquiridos al amparo de los Convenios citados en los apartados anteriores.

Artículo 35

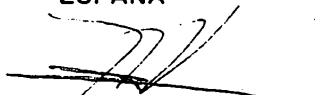
Entrada en vigor

El presente Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente al mes en que cada Parte Contratante haya recibido de la otra Parte notificación escrita de que se han cumplido todos los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios para la entrada en vigor del Convenio.

En fe de lo cual, los representantes autorizados de ambas Partes Contratantes firman el presente Convenio.

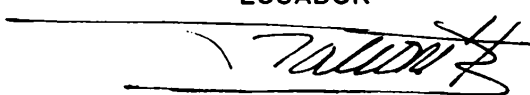
Hecho en Madrid, el día 4 de diciembre de 2009, en dos ejemplares en lengua española, siendo ambos textos igualmente auténticos.

**POR EL REINO DE
ESPAÑA**



**Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé
Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación**

**POR LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR**



**Fander Falconi Benítez
Ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración**

[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE REPUBLIC OF ECUADOR

The Kingdom of Spain and the Republic of Ecuador, hereafter referred to as "the Contracting Parties",

Having decided to cooperate in the area of social security;

Considering the importance of guaranteeing more effectively the rights of workers of either State who carry out or have carried out an occupational activity in the other;

Recognizing the ties of friendship linking the two States;

Have agreed as follows:

TITLE I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Definitions

1. For the purposes of this Agreement, the expressions and terms listed below shall have the following meanings:

(a) "Legislation": The legislation, regulations and any other social security provisions referred to in article 2, in force in the territory of each Contracting Party;

(b) "Competent Authority":

-In the case of Spain, the Ministry of Labour and Immigration;

-In the case of the Republic of Ecuador, the Ecuadorian Institute of Social Security;

(c) "Competent Institution": The institution responsible, under the legislation of each Contracting Party, for recognition of entitlement and granting of benefits;

(d) "Liaison body": The body responsible for coordination and for transmission of information between the institutions of the two Contracting Parties which participates in implementing the Agreement and informing those concerned of the rights and obligations arising from it;

(e) "Worker": Any person who, as a result of working or having worked as a wage earner or as a self-employed person, is, or has been, subject to the legislation listed in article 2;

(f) "Pensioner": Any person receiving a pension pursuant to the legislation of one or both of the Contracting Parties.

(g) "Members of the family and successors": The persons recognized as such by the applicable legislation of either Contracting Party;

(h) "Residence": Legally established usual stay;

(i) "Stay": Temporary sojourn in a Party's territory of a person having residence in the other Party;

(j) "Periods of insurance ": Periods of obligatory or voluntary contribution that are defined or admitted as periods of insurance by the legislation under which they have been covered or are considered as covered, and any periods recognized by that legislation as equivalent to periods of insurance.

(k) "Financial benefit" and "pension": Any benefit in cash, and any pension, provided for in the legislation that, in accordance with article 2, are provided for in this Agreement, and any raises through adjustments, complements or supplements of such benefits.

2. Other terms or expressions used in this Agreement shall have the meaning assigned to them by the applicable legislation.

Article 2. Legislation covered

1. This Agreement shall apply:

(A) In the case of Ecuador:

To the legislation on contributory benefits of Obligatory General Insurance under the responsibility of the Ecuadorian Institute of Social Security, with regard to:

- (a) Maternity subsidy;
- (b) Illness subsidy;
- (c) Disability, old-age and death insurance, including pensions to surviving widowers or widows and orphans;
- (d) Work-related risk insurance for industrial accident and occupational disease contingencies;
- (e) Funeral grants.

(B) In the case of Spain:

To the legislation on contributory benefits of the Spanish Social Security System, with the exception of special schemes for civilian and military public officials, with regard to:

- (a) Temporary disability in cases of ordinary or non-industrial accidents;
- (b) Maternity, and risks during pregnancy;
- (c) Permanent disability, retirement and survivors' entitlements;
- (d) Financial benefits for industrial accidents and occupational diseases;
- (e) Death grants.

2. This Agreement shall also apply to legislation that in future amplifies or amends the legislation referred to in the preceding paragraphs.

3. This Agreement shall apply to legislation that in either Contracting Party extends the law in force to new groups of persons, provided that the Competent Authority of the other Party does not object within three months following receipt of the notification of such provisions.

4. This Agreement shall apply to legislation establishing a new special scheme of social security or a new branch, provided that the Contracting Parties so agree.

5. Periods that, pursuant to the legislation of a Party, may count towards entitlement to benefits under other social security agreements comparable to this Agreement shall not be included.

Article 3. Persons covered

This Agreement shall apply to workers and pensioners who are or have been subject to the legislation listed in article 2 in either Contracting Party or both Contracting Parties and to the members of their families and their successors as the case may be.

Article 4. Equal treatment

Nationals of either Contracting Party and the members of their families or their successors shall be subject to and benefit from social security in the territory of the other Party under the same conditions as the nationals of that other Party, without prejudice to special provisions contained in this Agreement.

Article 5. Aggregation of periods

1. Where the legislation of a Contracting Party makes the acquisition, preservation or recovery of entitlement to contributory-type financial benefits conditional upon the completion of certain periods of insurance, the competent institution shall take into account for that purpose, whenever necessary, the periods of insurance completed pursuant to the legislation of the other Contracting Party as if they were periods completed pursuant to the legislation of the first Party, as long as the periods in question do not overlap.

2. Where periods of insurance completed in the territory of both Countries Parties are to be aggregated with a view to recognition of entitlement to benefits, the following rules shall apply:

(a) Where a period of obligatory insurance coincides with a period of voluntary or assimilated insurance, the period of compulsory insurance shall be taken into account;

(b) Where two periods of voluntary insurance completed in both Contracting Parties coincide, each Party shall take into account the periods of voluntary insurance completed in its territory;

(c) Where it is not possible in one Party to state accurately at what stage certain periods of insurance were completed, those periods shall be assumed not to overlap with the periods of insurance completed in the territory of the other Party.

3. If periods of insurance are required for admission to voluntary insurance or for optional continuation of insurance, the periods of insurance covered by the worker pursuant to the legislation of a Contracting Party shall be added, if necessary, to the periods of insurance covered pursuant to the legislation with the other Party, as long as the periods in question do not overlap.

Article 6. Payment of financial benefits abroad

1. Unless this Agreement otherwise provides, financial benefits shall not be subject to reduction, change, suspension, abolition or retention on the grounds that the beneficiary is or resides in the territory of the other Party and shall be paid by the Contracting Party having recognized them, in the financial establishment designated by the beneficiary.

2. The provisions of the preceding paragraph shall not apply to financial benefits for temporary disability.

3. Pensions recognized under this Agreement for beneficiaries residing in a third country shall be paid, taking into account the preceding paragraphs, on the same terms and for the same period of time as those paid to the nationals of the paying Party who also reside in that third country

TITLE II. PROVISIONS ON THE APPLICABLE LEGISLATION

Article 7. General rule

Workers to whom this Agreement is applicable shall be subject exclusively to the social security legislation of the Contracting Party in whose territory they exercise an occupational activity, regardless of the provisions of article 8.

Article 8. Special rules and exceptions

1. The following special rules and exceptions shall apply with regard to the provisions of article 7:

(a) A worker employed by an enterprise having its headquarters in either Contracting Party who is sent by that enterprise to the territory of the other Party to carry out work of a temporary nature shall remain subject to the legislation of the first Party, provided that the foreseeable duration of the work for which he or she has been relocated does not exceed a period of three years nor has he or she been sent in replacement of another worker whose relocation period has ended.

(b) If, as a result of unforeseeable circumstances, the duration of the work referred to in the preceding paragraph should exceed three years, the worker shall continue to be subject to the legislation of the first Contracting Party for a new period, not longer than two years, provided that the Competent Authority of the second Party or an organization authorized by it gives its consent.

(c) A self-employed worker who normally exercises his or her activity in the territory of a Contracting Party in which he or she is insured and happens to carry out work of the same nature in the territory of the other Party shall remain fully subject to the legislation of the first Party, provided that the foreseeable duration of that work does not exceed three years.

(d) If, as a result of unforeseeable circumstances, the duration of the work referred to in the preceding paragraph should exceed three years, the worker shall continue to be

subject to the legislation of the first Contracting Party for a new period, not longer than two years, provided that the Competent Authority of the second Party or an organization authorized by it gives its consent.

(e) Itinerant personnel working for air transport companies operating in the territory of both Contracting Parties shall be subject to the legislation of the Party in which the company has its headquarters.

(f) An employed worker carrying out his or her activity aboard a ship shall be subject to the legislation of the Contracting Party whose flag the ship is flying.

Nevertheless, where a worker is remunerated for that activity by an enterprise or person domiciled in the territory of the other Contracting Party, he or she shall be subject to the legislation of that Contracting Party if he or she resides therein. The enterprise or person who pays the remuneration shall be considered as the employer with respect to the application of the said legislation.

(g) Workers having the nationality of either Contracting Party who reside therein and work in a joint fishing enterprise incorporated in the other Party and on a ship flying the flag of that Party shall be considered as belonging to the participating company of the country of which they are nationals and in which they reside and, therefore, shall be subject to the legislation of that Contracting Party, while the said enterprise shall assume its obligations as employer.

(h) Workers employed in loading, unloading, ship repairs and surveillance in a port shall be subject to the legislation of the Contracting Party to whose territory the port belongs.

(i) Members of diplomatic missions and consular offices and the personnel privately employed by them shall be governed by the provisions of the Vienna Conventions on Diplomatic Relations of 18 April 1961 and on Consular Relations of 24 April 1963, without prejudice to the following provisions:

The administrative, technical and service personnel of the diplomatic missions and consular offices of each Party, and the personnel privately employed by the members of such missions and offices, may opt for the application of the legislation of one or the other Contracting Party, provided they are nationals of the sending State or have been subject to its legislation.

That option shall be exercised within the three first months following the entry into force of this Agreement or, as the case may be, within three months from the date of commencement of work in the territory of the receiving State.

(j) Public officials of either Contracting Party, other than those referred to in subparagraph (i), who are sent to the territory of the other Party shall be subject to the legislation of the Party to which the service to which they are attached belongs.

(k) Persons sent by either Contracting Party on cooperation missions to the territory of the other Party shall be subject to the social security legislation of the sending Party, unless the cooperation agreements otherwise provide.

2. The Competent Authorities of both Contracting Parties or the organizations and institutions designated by them may, by mutual accord, establish other exceptions or amend the exceptions provided for in the foregoing paragraphs.

TITLE III. PROVISIONS REGARDING BENEFITS.

CHAPTER 1. FINANCIAL BENEFITS FOR TEMPORARY DISABILITY, MATERNITY AND RISKS DURING PREGNANCY.

Article 9. Recognition of entitlement

Financial benefits for temporary disability resulting from ordinary illness or a non-industrial accident, for maternity and for risks during pregnancy shall be granted by the Competent Institution of the Contracting Party whose legislation is applicable to the worker under articles 7 and 8 of this Agreement and in accordance with that legislation.

CHAPTER 2. FINANCIAL BENEFITS FOR PERMANENT DISABILITY, RETIREMENT AND SURVIVORS

Section 1. Common provisions

Article 10. Determination of entitlement and calculation of financial benefits

Any worker who has been subject to the legislation of either Contracting Party shall be entitled to the benefits regulated in this Chapter, on the following terms:

1. The Competent Institution of each Contracting Party shall determine the entitlement and calculate the financial benefit, considering solely the periods of insurance completed in that Contracting Party.

2. Moreover, the Competent Institution of each Contracting Party shall determine the entitlement to financial benefits by summing up the periods of insurance completed under the legislation of both Contracting Parties. When, after this addition, entitlement to benefits has been established, the amount to be paid shall be calculated by applying the following rules:

(a) The amount of the benefit to which the person concerned is entitled shall be determined as if all the periods of insurance added together had been completed under that person's own legislation (theoretical pension);

(b) The amount of the benefit shall be established by applying to the theoretical pension, calculated according to the person's own legislation, the same ratio that exists between the period of insurance completed in that Contracting Party and the total periods of insurance completed in both Parties (pro rata pension);

(c) If the legislation of either Contracting Party requires a maximum duration of periods of insurance with a view to recognition of a complete benefit, the Competent Institution of that Party shall take into account, for the calculation of the pension, only the periods of contribution of the other Party necessary for entitlement to that full pension.

These provisions shall not apply to financial benefits whose amount is not a function of the periods of insurance.

3. Having determined the entitlement as laid down in foregoing paragraphs 1 and 2, the Competent Institution of each Contracting Party shall recognize and pay the financial benefit most advantageous to the person concerned, regardless of the decision taken by the Competent Institution of the other Contracting Party.

Article 11. Amounts due for periods of voluntary insurance

In order to calculate the theoretical pension and the actual amount of the financial benefit in accordance with the provisions of article 10, paragraph 2, the rules laid down in article 5 shall apply.

The amount actually due, calculated in accordance with the provisions of article 10, paragraph 2, shall be increased by the amount corresponding to the periods of voluntary insurance which have not been taken into account in accordance with the provisions of article 5, paragraph 2 (a). Such increase shall be calculated according to the provisions of the Contracting Party's legislation under which the periods of voluntary insurance have been completed.

Article 12. Periods of insurance shorter than one year

1. Notwithstanding the provisions of article 10, paragraph 2, where the total duration of the periods of insurance completed under the legislation of a Contracting Party is shorter than one year, and entitlement to benefits is not attained under the legislation of that Party, the Institution of that Party shall not recognize any benefit for the period concerned.

The aforementioned periods shall be taken into account, if necessary, by the Institution of the other Contracting Party with a view to recognition of entitlement and determination of the amount of the benefit in accordance with its own legislation but the Institution shall not apply the provisions of article 9, paragraph 2(b).

2. Notwithstanding the provisions contained in the preceding paragraph, periods shorter than one year that have been completed under the legislation of both Contracting Parties may be aggregated by the Party in which the person concerned meets the requirements for access to the financial benefit. In the event of entitlement to the benefit in both Parties, such benefit shall be recognized solely by the Party in which the worker completes the latest contributions. In such cases, payment of the benefit shall not be subject to the provisions of article 10, paragraph 2.

Article 13. Specific conditions for the recognition of entitlement to financial benefits

1. If the legislation of a Contracting Party subordinates the granting of the benefits regulated under this chapter to the condition that the worker must have been subject to its legislation at the time when the incident giving rise to the benefit occurred, that condition shall be deemed to have been fulfilled if, at that time, the worker is insured under the

legislation of the other Party or else if he or she receives from that Party a financial benefit based on his or her own periods of insurance.

For the recognition of survivor's benefits, account shall be taken, if necessary, of whether the decedent was enrolled or a pensioner in accordance with the legislation of the other Party.

2. If the legislation of a Contracting Party requires, with a view to recognition of a financial benefit, that periods of contribution should have been completed during a particular period immediately prior to the incident that gave rise to the benefit, this condition shall be considered to have been fulfilled if the person concerned completes them during the period immediately prior to recognition of the benefit in the other Party

3. The clauses concerning reduction, suspension or elimination provided for by the legislation of either Contracting Party in the case of pensioners engaged in gainful employment shall be applicable to them even if they are engaged in such employment in the territory of the other Party.

Article 14. Calculation of periods of contribution to special schemes or in determined occupations

If the legislation of either Contracting Party makes entitlement to or granting of certain benefits conditional on the completion of insurance periods in an occupational activity subject to a special scheme or in a determined occupation or employment, the periods completed under the legislation of the other Party shall be taken into account with a view to the granting of such benefits, only if they have been completed under a scheme of the same nature or else in the same occupation or, depending on the case, a similar employment.

If, on taking into account the periods thus completed, the person concerned does not meet the required conditions of eligibility for a financial benefit under a special scheme, those periods shall be taken into account with a view to granting financial benefits under the general scheme or another special scheme under which the person concerned could become eligible for entitlement.

Article 15. Determination of the degree of disability

1. In determining a reduction in the ability to work with a view to granting appropriate financial benefits for disability, the Competent Institution of each Contracting Party shall carry out its evaluation in accordance with the applicable legislation.

2. For the purposes of the provisions of the preceding paragraph, the Competent Institutions of each Contracting Party shall take into account the medical reports and administrative information issued by the Institutions of the other Party. However, each Institution may subject the persons concerned to examinations by physicians selected by that Institution, and under its responsibility.

Section 2a. Application of Spanish legislation

Article 16. Regulatory basis for financial benefits

1. In order to establish the regulatory basis for financial benefits, the Competent Institution shall take into account solely the periods of insurance completed in accordance with its legislation.

2. In order to determine the regulatory basis for financial benefits where the provisions of article 10, paragraph 2, apply, the following rules shall be followed:

(a) The calculation of the Spanish theoretical pension shall be based on the actual contributions of the person concerned in Spain during the years that immediately precede payment of the last contribution to the Spanish social security;

(b) The amount of the benefit shall be increased by the amount of raises and adjustments calculated for each subsequent year for benefits of the same nature.

Section 3a. Application of Ecuadorian legislation

Article 17

Disability, old-age and death benefits shall be granted on the basis of the provisions of the Social Security Act, its General Regulation and the relevant decisions of the Executive Board, subject to the contributions actually received.

The minimum benefit shall be proportional to the time for which contributions have been made to the Ecuadorian Institute of Social Security.

Pro rata temporis benefits shall in no case exceed the applicable maximum.

CHAPTER 3. FINANCIAL BENEFITS FOR INDUSTRIAL ACCIDENTS AND OCCUPATIONAL DISEASES

Article 18. Determination of entitlement to financial benefits

Entitlement to benefits arising from industrial accidents or occupational diseases shall be determined in accordance with the Contracting Party's legislation to which the worker is subject on the date that the accident occurred or the disease was contracted.

Article 19. Aggravation from after-effects of an industrial accident

If a worker who is a victim of an industrial accident suffers an aggravation from after-effects of the accident while he or she is subject to the social security of the other Party, the Competent Institution of the Contracting Party in which the worker was insured

when the industrial accident occurred shall be responsible for any benefits to which the worker is entitled for such aggravation.

Article 20. Occupational disease

1. Financial benefits for occupational disease shall be determined in accordance with the Contracting Party's legislation applicable to the worker during the exercise of the activity involving a risk of such disease, even if the disease was diagnosed for the first time while the worker was subject to the legislation of the other Party. If no entitlement to financial benefits can be attained in that Party, the provisions of the legislation of the first Party shall apply.

2. Where a worker was successively or alternately engaged in that activity while subject to the legislation of both Parties, entitlement shall be determined in accordance with the legislation of the Party to which the worker is or was last subject on the basis of that activity.

Article 21. Aggravation of occupational disease

1. Where an occupational disease has been the basis for financial benefits granted by either Contracting Party, that Party shall be liable for any aggravation of the disease even while the worker is subject to the legislation of the other Party, provided that the worker has not engaged in an activity involving the same risk. If, on the contrary, the activity carried out in the other Party has the same risk as the one having earlier caused the occupational disease, the worker shall be subject to the legislation of that last Party.

2. If, after being awarded a disability pension on grounds of occupational disease by the Institution of either Contracting Party, the beneficiary engages in an activity likely to aggravate the existing occupational disease while subject to the legislation of the other Party, the Competent Institution of the first Party shall continue to pay the original benefit awarded without taking into account any aggravation and in accordance with the provisions of its legislation. The Competent Institution of the second Party, to whose legislation the beneficiary was subject when the aggravation occurred, shall grant the beneficiary a benefit equal to the difference between the amount of the benefit to which the beneficiary is entitled following the aggravation and the amount of the benefit to which the beneficiary was entitled in that Party before the aggravation.

Article 22. Consideration of after-effects of earlier industrial accidents or professional diseases

In assessing ability reduction resulting from an industrial accident or occupational disease, account shall be taken of after-effects of any previous industrial accidents or occupational diseases that the worker may have sustained even if he or she was subject to the legislation of the other Contracting Party when such after-effects occurred.

CHAPTER 4. ASSISTANCE ON DEATH OR WITH FUNERAL COSTS

Article 23. Assistance on death or with funeral costs

Assistance on death or with funeral costs shall be governed by the legislation that was applicable to the worker at the time of death.

1. In the case of pensioners who had been entitled to financial benefits under the legislation of both Contracting Parties, recognition of the entitlement shall be regulated by the legislation of the Contracting Party in whose territory the insured person resided.

2. If the pensioner's residence was in a third country, the applicable legislation, if he or she was entitled to financial benefits in both Contracting Parties, shall be the one of the Contracting Party where he or she was insured last.

TITLE IV. MISCELLANEOUS, INTERIM AND FINAL PROVISIONS.

CHAPTER I. MISCELLANEOUS PROVISIONS. .

Article 24. Powers and obligations of the Competent Authorities.

1. The Competent Authorities of both Contracting Parties shall be entrusted with establishing the administrative agreement necessary for the implementation of this Agreement.

2. The Competent Authorities of both Parties shall:

- (a) Designate the respective liaison bodies;
- (b) Communicate the measures adopted at the internal level for the implementation of this Agreement;
- (c) Notify all legislative and regulatory provisions amending those referred to in article 2;
- (d) Provide the broadest possible technical and administrative cooperation for the implementation of this Agreement;
- (e) Interpret jointly any provisions of the Agreement that may create uncertainties for their Competent Institutions.

3. A Joint Commission, chaired by the Competent Authorities of the two Contracting Parties, may meet at the request of either such Authority in order to examine any problems that may arise in implementing this Agreement and the administrative agreement.

Article 25. Submission of documents

1. Any claims, notices, appeals or other documents that must be submitted within a prescribed period to the appropriate Authorities or Institutions of either Contracting Party

pursuant to its legislation shall be considered to have been thus submitted if they were delivered to the corresponding Authority or Institution of the other Party within the same period.

2. Any claim for a benefit submitted pursuant to the legislation of either Contracting Party shall be considered to be a claim for the corresponding benefit under the legislation of the other Party, provided that the claimant expressly states, or it is possible to deduce from the documentation presented, that he or she was engaged in an occupational activity in the territory of that Party.

3. The person concerned may specifically request that the benefit is paid to him or her in accordance with the legislation of either Party.

Article 26. Administrative support between Institutions

1. The Competent Institutions of the two Contracting Parties may at any time request medical examinations and verification of facts and documents which may result in the granting, modification, suspension, reduction, cancellation, elimination or maintenance of entitlement to benefits awarded by them. Any costs incurred as a result shall be reimbursed without delay by the competent institution requesting the examination or verification, upon receipt of an itemized statement of such costs.

2. The Competent Institution of either Contracting Party which, on paying or reviewing a financial benefit under the provisions of Title III of this Agreement, finds that it has made an overpayment to the beneficiary, may request the other Party's Competent Institution which owes benefits of the same kind to the same beneficiary to withhold the amount of the overpayment from the first payment of arrears corresponding to the periodic payments, within the limits set in the legislation of the withholding Party. The second Institution shall transfer the amount withheld to the creditor Institution.

Article 27. Exemption in connection with administrative certificates and documents

1. Any exemption from recording or drafting fees, stamp duties and consular fees or other similar payments provided for in the legislation of either Contracting Party shall be extended to certificates and documents issued by the administration or competent institutions of the other Party in implementation of this Agreement.

2. All administrative certificates and documents issued under this Agreement shall be exempt from legalization and authentication requirements.

Article 28. Updating or adjustment of financial benefits

Financial benefits recognized pursuant to the provisions of Title III of this Agreement shall be updated or adjusted according to the internal legislation of each Contracting Party, taking into account the provisions of this Agreement.

Article 29. Methods and guarantee for the payment of financial benefits

1. The Competent Institutions in each Contracting Party shall be deemed to have discharged their obligation to pay a benefit when they make the payment in their national currency.

2. Should provisions restricting the transfer of foreign currency be promulgated in either Contracting Party, both Parties shall immediately adopt the measures necessary to guarantee the effective exercise of the rights arising under this Agreement.

Article 30. Settlement of disputes

1. The Competent Authorities shall resolve through negotiations any differences of interpretation with regard to this Agreement and its administrative agreement.

2. Any dispute that it has not been possible to resolve through negotiations within a period of six months from the start of the negotiations shall be submitted to an arbitral commission, the composition and procedures of which shall be established by mutual consent between the Contracting Parties. The decisions of the arbitral commission shall be binding and final.

CHAPTER 2. INTERIM PROVISIONS

Article 31. Calculation of periods prior to the entry into force of the Agreement

Insurance periods completed under the legislation of each Party prior to the date of entry into force of the Agreement shall be taken into consideration in determining entitlement to the benefits awarded there under.

Article 32. Originating events preceding the entry into force of the Agreement

1. The application of this Agreement shall confer entitlement to benefits for events which occurred before it entered into force. However, financial benefits shall in no case be made for periods prior to the entry into force of the Agreement.

2. Pensions paid by one or both of the Parties or entitlements to pensions denied prior to the entry into force of this Agreement may be reviewed under its provisions and in accordance with the legal procedure established in each Party, at the request of the persons concerned. Any entitlement shall be effective from the date of the request, unless the legislation of the Party concerned contains a more favourable provision.

No lump-sum benefits that have been paid may be reviewed.

CHAPTER 3. FINAL PROVISIONS

Article 33. Period of validity of the Agreement

1. This Agreement is concluded for an indefinite period and may be terminated in whole or in part by either Contracting Party through a notice addressed to the other Party. In that event, the Agreement shall cease to have effect six months following the transmission of such notice.

2. In the event of termination, the provisions of this Agreement shall continue to apply to entitlements granted pursuant to it. Moreover, the Contracting Parties shall adopt measures guaranteeing any entitlements in the process of acquisition which derive from periods of insurance completed prior to the date of termination of the Agreement.

Article 34. Termination of earlier agreements

1. The General Agreement on Social Security between Ecuador and Spain of 1 April 1960 and the agreement of 8 May 1974 additional to the Agreement on Social Security between Spain and Ecuador shall cease to have effect upon entry into force of this Agreement.

2. This Agreement shall guarantee the entitlements acquired under the agreements referred to in the preceding paragraphs.

Article 35. Entry into force

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the month in which each Contracting Party shall have received from the other Party written notification that all constitutional, legal and regulatory requirements for entry into force of the Agreement have been fulfilled.

IN WITNESS WHEREOF, the authorized representatives of both Contracting Parties sign this Agreement.

DONE at Madrid, on 4 December 2009, in duplicate, in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Kingdom of Spain:

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBE
Minister of Foreign Affairs and Cooperation

For the Republic of Ecuador:

FANDER FALCONÍ BENÍTEZ
Minister of Foreign Affairs, Trade and Integration